

-1-501

**SEÑOR JUEZ CONSTITUCIONAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓN-
DOR**

I. LEGITIMACIÓN ACTIVA.-

ANTONIO GONZALO AGUILAR CHAMBA, en calidad de Delegado de la Defensoría del Pueblo de Zamora Chinchipe, conforme lo acredito con los documentos habilitantes que adjunto, con cédula de ciudadanía N° 1101890760 domiciliado en la ciudad de Zamora; ante su autoridad muy respetuosamente comparezco para interponer de oficio la siguiente acción de protección, conforme a lo dispuesto en los arts. 86 número 1; art. 88; art. 215 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; art. 9 literal b) y art. 39 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Los nombres y apellidos de las personas afectadas son: **ULDA MÓNICA ÁLVAREZ VARGAS**, concejala rural del cantón Centinela del Cóndor, como lo justifico con la certificación otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), domiciliada en la parroquia Panguintza, cantón Centinela del Cóndor, portadora de la cédula de identidad N.º 1900342310, a quien se podrá notificar al correo electrónico monicalvarez26@hotmail.com; y, **JENNY DEL CISNE CABRERA PARDO**, con cédula de ciudadanía N.º 1900340819, domiciliada en la parroquia Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, concejal urbana del cantón Centinela del Cóndor, como lo justifico con la certificación otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a quien se podrá notificar al correo electrónico jenny_cabrera1975@hotmail.com.

II. IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD PÚBLICA O LEGITIMADO PASIVO.

Los accionados son: El Concejo Municipal del cantón Centinela del Cóndor, representado legalmente por el Ing. Luis Alberto Merino González, en calidad de Alcalde, Abg. Diego Fernando Juárez; Sr. Carlos Jiménez Jiménez; y, Lic. José Francisco Guamán Guamán en calidad de concejales del cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe; Dr. José Misael Granda Jimbo, en calidad de Procurador Síndico o quien ocupe dicho cargo actualmente

Cuéntese en esta acción de protección con el señor Procurador General del Estado,

III. FUNDAMENTOS DE HECHO

Conforme consta en el Acta de Sesión Inaugural del Concejo Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, que se adjunta a la presente acción, el día miércoles 15 de mayo de 2019, siendo las diez horas, se instala la sesión inaugural de constitución del Concejo Municipal de Centinela del Cóndor, bajo la presidencia del Ing. Luis Alberto Merino González, Alcalde del cantón Centinela del Cóndor, con la asistencia de las siguientes señoras y señores concejales: Ing. Ulda Mónica Álvarez Vargas; Sra. Jenny del Cisne Cabrera Pardo; Abg. Diego Fernando Juárez; Sr. Carlos Jiménez Jiménez; y, Lic. José Francisco Guamán Guamán

En la referida sesión se declaró formalmente instalado y legalmente constituido el Concejo Municipal del Cantón Centinela del Cóndor para el periodo 2019 – 2023.

Conforme se desprende del Acta de Sesión, el cuarto punto que se trató en la misma fue la elección y posesión del Vicealcalde o Vocealcaldesa del GAD Municipal de Centinela del Cóndor. En dicha sesión se elige al señor Abg. Diego Fernando Juárez como Vicealcalde del GAD Municipal de Centinela del Cóndor.

Nótese señor Juez que en el Concejo Municipal de Centinela del Cóndor existen dos Concejales, las mismas que ni siquiera fueron consideradas como candidatas para ocupar la Vicealcaldía del mencionado GAD Municipal, vulnerando derechos fundamentales como lo voy a demostrar a continuación:

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Vulneración del derecho a la seguridad jurídica en cuanto al principio de igualdad con criterios de equidad y paridad de género en la participación política de las personas

El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto a la seguridad jurídica, indica que:

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes

Disposición que se refuerza con lo establecido en el artículo 11 de la Constitución del Ecuador, específicamente en sus numerales 3 y 4, que expresamente estipulan que:

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.

Al respecto de la seguridad jurídica, la Corte Constitucional del Ecuador ha expresado que:

La importancia del derecho a la seguridad jurídica radica entonces en dos aspectos fundamentales: El primer aspecto, es que **el Estado, al hacer uso del poder con el que cuenta (cuando manifiesta su voluntad a través de un acto jurídico por medio de los distintos órganos que lo componen) debe contar con las garantías mínimas de certeza y confianza de que el propio Estado se somete a los diversos lineamientos que integran el ordenamiento jurídico, a través del cual se legitima su accionar. Estas garantías de certeza son el conjunto de condiciones, elementos, requisitos o circunstancias previas a las cuales debe sujetarse el Estado para generar una afectación válida a los intereses de los gobernados y al conjunto de sus derechos.** El segundo aspecto es que la seguridad jurídica permite complementar y reforzar el ejercicio del derecho a la libertad, ya que el derecho a la seguridad jurídica supone la creación de un ámbito de certeza y confianza en las relaciones sociales, y en las relaciones de la sociedad civil con el Estado.¹ (Énfasis añadido).

En virtud de lo manifestado, el derecho a la seguridad jurídica se constituye en **garantía para que los derechos sean respetados, puesto que una situación jurídica no será cambiada sino por los procedimientos establecidos previamente;** he ahí su importancia en el contexto constitucional, la finalidad es mantener el orden jurídico, con la sujeción de todos los poderes del Estado a la Constitución y la Ley.² (Énfasis añadido).

Es decir, que la seguridad jurídica implica la confianza de que el Estado, a través de los distintos órganos que lo componen, actuará conforme a lo establecido en la Constitución del Ecuador y la demás normativa que sea acorde a ella. Entonces, para que se haya vulnerado el derecho a la seguridad jurídica, es necesario que lo que se reclame, demande o exija, se encuentre previamente establecido en la normativa vigente.

En el caso que nos ocupa esto es así, respecto a la paridad de género el artículo

¹ Sentencia: N° 062-17-SEP-CC, del 8 de Marzo de 2017. Registro Oficial N° 7 Suplemento, 2 de Mayo de 2017.

² Sentencia: N° 210-18-SEP-CC, del 13 de Junio de 2018, Registro Oficial N° 62 Suplemento, 19 de Octubre de 2018.

61.7 de la Constitución de la República del Ecuador indica que:

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.

Es así que la Constitución de la República del Ecuador establece como un derecho de las y los ecuatorianos el desempeñar empleos y funciones públicas, mediante sistemas de selección y designación que garanticen la participación con criterios de equidad y paridad de género. Este derecho se complementa con el artículo 65 de la Constitución de la República del Ecuador, mismo que indica que:

Art. 65.- **El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública**, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados.

La paridad de género es concebida también como un principio sobre el cual debe tomarse las decisiones de nominación o designación, que es el caso que nos ocupa, en la función pública, aplicable en todos los niveles de gobierno, nacional o descentralizado; al ser la Constitución la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico y sobre la cual deberán realizarse todas las normas y actos del poder público, conforme se desarrollará en el punto número 2.

Pero además de la norma constitucional, es el mismo Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el que en el inciso segundo de su artículo 317, indica que:

Los consejos regionales, concejos metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad del ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible (...)

En el caso del Concejo Municipal de Centinela del Cóndor, este **compartir** del poder, toma de decisiones y funciones públicas con una mujer, es perfectamente posible, pues existen dos mujeres que han sido elegidas concejales, por tanto, de entre ellas, se debió nombrar a la segunda autoridad de ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor y con ello proteger, respetar, garantizar, y realizar el derecho a la igualdad material con un enfoque o criterios de equidad y paridad de género.

En el caso concreto, la designación del Vicealcalde o Vicealcaldesa en el Concejo Municipal de Centinela del Cóndor, debió realizarse en respeto a lo establecido por la Constitución de la República del Ecuador, específicamente sobre el derecho y «*principio de paridad*» y el respeto a lo previamente establecido el artículo 317 del COOTAD.

Para comprender la importancia de la paridad de género, hemos creído conveniente contextualizarla en torno al derecho a la igualdad material, también conocida como igualdad sustancial. Respecto al derecho a la igualdad, la Constitución de la República del Ecuador, dispone que:

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

Siendo así que el derecho a la igualdad, tiene tres componentes, la no discriminación, el derecho a la igualdad formal, entendida como la igualdad de todos ante la ley; y, la igualdad material, también entendida como igualdad sustancial. Sobre esta última, la Corte

Aplicado
Yucha

Constitucional ha dicho que:

La Constitución de la República reconoce dos categorías de igualdad: formal y material. La primera de ellas se refiere a la igualdad ante la ley, por medio de la cual se proclama que las normas jurídicas deben ser aplicadas a todas las personas, sin distinción de ninguna clase (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 058-14-SEP-CC, caso N.º 0435-II-ER). Esta categoría se refiere a la igualdad en la aplicación del derecho, lo que, a decir del jurista Robert Alexi, toda norma jurídica sea aplicada a todo caso que cae bajo su supuesto de hecho y a ningún caso que no caiga bajo dicho supuesto, es decir, que las normas jurídicas tienen que ser obedecidas (Alexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2ª Edición, Madrid, p. 348). Por su parte, la categoría material implica que una medida, en su afán de buscar un trato igualitario, debería considerar las diferencias existentes en la práctica, que hacen que la situación de cada uno de los titulares del derecho sea particular. En otras palabras, la aplicación de la regla destinada a tratar a todos por igual, causará que uno de los sujetos, en comparación, vea seriamente disminuido el estatus de protección de sus derechos.³

Por otro lado, la dimensión material de este derecho, parte del reconocimiento de las diferencias existentes respecto a las condiciones materiales para el desarrollo de las personas en cuyo caso, corresponde al Estado, desarrollar y adoptar las acciones positivas necesarias que promuevan la equiparación de las situaciones materiales de los individuos o grupos sociales que se encuentren en desventaja frente a quienes tengan mejores condiciones.⁴

Ello quiere decir que existen condiciones materiales que impiden que las personas puedan ejercer en igualdad de condiciones los derechos consagrados, como los derechos políticos en el caso que aquí nos ocupa, y que se encuentran consagrados tanto en la Constitución de la República del Ecuador, artículo 61; y en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23, que estipula que:

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

³ Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia: N° 197-15-SEP-CC, del 17 de Junio de 2015.

⁴ Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia: N° 122-16-SEP-CC, del 20 de Abril de 2016.

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. (...). (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969 Art. 23.

Siendo así que resulta necesario que se tomen acciones desde el Estado, para garantizar que las personas podamos gozar en igual medida de los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente; por lo que la paridad de género, constituida en la Constitución de la República del Ecuador, es un derecho y un principio creado por el constituyente con el fin de velar que las personas podamos ejercer los derechos políticos y de participación, en igual medida, superando las barreras materiales y estructurales, como las propias de una sociedad patriarcal.

Por lo que, al no respetar las disposiciones respecto a la paridad establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y el COOTAD, el Concejo Municipal de Centinela del Cóndor vulneró el derecho a la seguridad jurídica en cuanto al principio de igualdad con criterios de equidad y paridad de género en la participación política de las personas, lo que lleva a la vulneración del derecho a la igualdad sustancial.

2. Vulneración de la supremacía constitucional e inobservancia de instrumentos internacionales de derechos humanos

El artículo 1 de la Constitución de la República proclama al Ecuador como “(...) un Estado constitucional de derechos y justicia, democrático (...)”. Durante el año 2008 el Ecuador, al igual que otros países de la región, atravesó un proceso de rediseño constitucional, lo cual implicó un cambio estructural, en la parte dogmática y orgánica de la «*Constitución de Montecristi*».⁵

El rediseño constitucional plasmado por la Constitución de Montecristi, supone al Estado como el responsable de la realización de los derechos y transforma a la Constitución, que era entendida como una estructura de protección de la sociedad frente al poder político, a ser ahora un instrumento del poder político para la realización de los derechos.⁶

⁵ El Estado en la Nueva Constitución, Julio Echeverría, en *La Nueva Constitución del Ecuador Estado, derechos e instituciones*, ed. Santiago Andrade, Agustín Grijalva, Claudia Storini. (Quito: Corporación Editora Nacional, 2009), 11.

⁶ El Estado en la Nueva Constitución, Julio Echeverría, en *La Nueva Constitución del Ecuador Estado, derechos e instituciones*, ed. Santiago Andrade, Agustín Grijalva, Claudia Storini. (Quito: Corporación

Siendo así que la ley y las actuaciones del poder público se encuentran sometidas a una relación de adecuación y de subordinación, a un estrato más alto de derecho que es el establecido en la Constitución y en las obligaciones internacionales contraídas por el Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos. Al respecto, la Constitución indica que:

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. **Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales;** en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución.

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución aunque las partes no las invoquen expresamente.

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.

Art. 427.- Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.

De la lectura de los artículos constitucionales citados se puede evidenciar claramente que al ser la Constitución de la República la norma jurídica suprema, todas las normas y

Editora Nacional, 2009), 14.

7 Gustavo Zagrebelsky, "El Derecho dúctil". (Madrid: Trotta, 1997), 34.

actos del poder público deben mantener conformidad con ella; y expresamente todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la misma. De igual manera, cabe destacar que la interpretación de las normas constitucionales se realizará por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Por lo que la designación de Vicealcalde o Vicealcaldesa del Concejo Municipal de Centinela del Cóndor debió realizarse en estricto respeto del derecho a la paridad de género establecido en la Constitución de la República del Ecuador y sobre el cual nos referimos en el punto 1 de esta demanda, siendo así que, la designación del Abg. Diego Fernando Juárez, vulnera los derechos arriba referidos.

Pero además de ello, la designación efectuada va en contra de lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual fue ratificada por el Estado ecuatoriano en 1981, y con la cual el Ecuador se obligó, entre otros, a:

Art. 7.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país **y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:**

- a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
- b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, **y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;**
- c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

Respecto al artículo que antecede, la Recomendación General N° 23 “Vida Política y Pública” adoptada en el 16° Período de Sesiones, el 03 de enero de 1997, ha indicado que:

41. Los Estados Partes deben garantizar que sus constituciones y su legislación se ajusten a los principios de la Convención, en particular, a los artículos 7 y 8.

43. Los Estados Partes deben **idear y ejecutar medidas temporales especiales para garantizar la igualdad de representación de las mujeres en todas las esferas que abarcan los artículos 7 y 8.**

45. Las medidas que hay que **idear, ejecutar y supervisar para lograr la eficacia incluyen, en virtud del párrafo a) del artículo 7, las que tienen por objeto:**

- a) **Lograr un equilibrio entre mujeres y hombres que ocupen cargos de elección pública (...)**



46. Las medidas en virtud del párrafo b) del artículo 7 incluyen las que están destinadas a asegurar:

(...) b) **Su goce efectivo de la igualdad de derechos a ocupar cargos públicos;**

47. Las medidas en virtud del párrafo c) del artículo 7, incluyen las que están destinadas a:

a) Asegurar la promulgación de una legislación eficaz que prohíba la discriminación de las mujeres (...)

De la misma manera, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en las Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador, indicó que:

24. El Comité encomia al Estado parte por haber adoptado un sistema de paridad entre los géneros y alternabilidad de candidatos y candidatas en las listas electorales para elecciones pluripersonales. **Sin embargo, observa con preocupación que la representación de la mujer en las elecciones unipersonales** y en los órganos políticos locales **sigue siendo limitada**, especialmente en el caso de las mujeres indígenas y afroecuatorianas.⁸

25. El Comité recomienda que el Estado parte:

a) **Adopte medidas para aumentar la participación de la mujer en elecciones unipersonales y en órganos políticos, especialmente a nivel local (...)**⁹

Es así que, la designación de un Vicealcalde, cuando el Alcalde es hombre, como en el presente caso, va en contra de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en la materia, vulnerando así los derechos aquí mencionados.

V. RELEVANCIA SOCIAL Y CASOS ANÁLOGOS

Además de lo anteriormente mencionado, la Defensoría del Pueblo del Ecuador considera oportuno exponer porque considera este un caso de relevancia social.

8 <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhssmw5jHDQuNBd%2B1WAIG8TIE%2BppoLdXJkL6FnJxOEZSiIXeTNz9s9WfAUAdZczlzb6eAITHgu%2F7bBissZuSLyCoAiVlrdnDmD2Xey5xb%2BKwHmOaJ7%2FLdSLcD711hiIw%3D%3D>

9 <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhssmw5jHDQuNBd%2B1WAIG8TIE%2BppoLdXJkL6FnJxOEZSiIXeTNz9s9WfAUAdZczlzb6eAITHgu%2F7bBissZuSLyCoAiVlrdnDmD2Xey5xb%2BKwHmOaJ7%2FLdSLcD711hiIw%3D%3D>

Señor Juez Constitucional de Derechos, las mujeres han sido históricamente discriminadas de la vida política y pública y se le han asignado por costumbre asuntos domésticos y posteriormente cuestiones de la vida pública de menor trascendencia.

Circunstancias que han llevado a la mujer a luchar por la reivindicación de su derecho a la igualdad en todos los ámbitos. Para lograr aquello ha sido necesario que los Estados se obliguen a la realización de acciones afirmativas mínimas que busquen la igualdad. Acciones que han partido con la adopción de legislación que equipare estas desigualdades.

Pero estas acciones mínimas, a las que se han obligado los Estados, son el punto de partida, el inicio para alcanzar siglos de desigualdad y por ningún motivo pueden ser consideradas como suficientes o el límite máximo para realizar el derecho a la igualdad material de las mujeres en el ámbito político y público. Mucho menos aún cuando se trata de desconocerlas o ignorarlas.

Como vemos, el Ecuador en lo que respecta a la igualdad formal, ha tomado medidas necesarias, apropiadas y adecuadas para cumplir con los derechos previstos en la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), así como la Recomendación General N° 23, Vida Política y Pública, en el 16° Período De Sesiones; ya que ha incluido en su normativa la paridad de género. Pero es necesario tener en cuenta que la igualdad formal, sola se cristaliza y se hace efectiva, palpable y real, cuando esta se ejecuta.

Para lograrlo, no basta con que este positivizada, es necesario que se busquen y tomen todas las medidas y actuaciones adecuadas para que se materialice, pues solamente ahí se cumple el derecho constitucional de igualdad formal, material y no discriminación de las mujeres en la vida política y pública.

El Estado Constitucional de Derechos y Justicia ecuatoriano, no es ajeno al reconocimiento de estos derechos. Tenemos en el país nueve precedentes en los que la justicia ha permitido la realización de los derechos aquí expuestos.

VI. IDENTIFICACIÓN DE LA PRETENSIÓN

Con las consideraciones, expuestas proponemos la presente Acción de Protección conforme a lo establecido en el art. 88 de la Constitución de la República y los art. 39 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que en sentencia declare:

- 1. La vulneración del derecho a la seguridad jurídica en cuanto al principio de igualdad con criterios de equidad y paridad de género en la participación**

-2019-10
V. C. A.
/

política de las personas; y, la vulneración de la supremacía constitucional e inobservancia de instrumentos internacionales de derechos humanos, que trae como consecuencia la vulneración del derecho de la igualdad material en correlación con el derecho de participación y ocupación de la función pública aplicando criterios de equidad y paridad de género de: Ulda Mónica Álvarez Vargas y Jenny de Jesús Cabrera Pardo. en su calidad de mujeres representantes del la ciudadanía del cantón Centinela del Cóndor en la vida política y pública, a desempeñar la función pública de Vicealcadesa. función que les permite compartir el poder y la toma de decisiones con el Ing. Luis Alberto Merino González, -hombre- que fue elegido para representar a la ciudadanía como Alcalde en el Cantón Centinela del Cóndor.

Solicito además que como reparación integral. **disponga:**

1. Dejar sin efecto la elección dada para la elección para la vicedalcaldía del Concejo Municipal de Centinela del Cóndor en sesión del 15 de mayo de 2019 a partir de las 10h00.
2. Que en forma inmediata, el Concejo Municipal de Centinela del Cóndor, convoque a sesión para elegir a la segunda autoridad del ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, es decir, su Vicealcadesa, conforme lo dispuesto en la Constitución de la República y el COOTAD.
3. Que la sentencia emitida, sea publicada en los medios de comunicación del cantón Centinela del Cóndor y/o en un diario de circulación provincial, así como en la página web institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor. durante el período 2019-2020, a fin de que las mujeres conozcan y se empoderen respecto de los criterios de equidad y paridad de género que les asisten.
4. Que se ordene al Municipio del Cantón Centinela del Cóndor realice procesos de capacitación a sus funcionarios y funcionarias en derechos humanos con enfoque de género. para lo cual podrá solicitar el apoyo de la Defensoría del Pueblo del Ecuador.

VII. DECLARACIÓN

Declaro que por estos mismos hechos no he interpuesto otra garantía jurisdiccional en contra de los accionados.

VIII. ELEMENTOS PROBATORIOS

A fin de demostrar la vulneración de los derechos antes mencionados, me permito adjuntar, copia certificada del ACTA DE LA SESIÓN INAUGURAL DEL CONCEJO CANTONAL DE CENTINELA DEL CÓNDOR, de 15 de mayo de 2019 a las 10h00 y Certificación del Consejo Nacional Electoral, Delegación de Zamora Chinchipe, la misma que certifica que las señoras: Ulda Mónica Álvarez Vargas y Jenny del Cisne Cabrera Pardo son concejales del cantón Centinela del Cóndor para el período 2019-2023.

IX. CITACIONES Y NOTIFICACIONES:

Sírvase citar a las autoridades demandadas en las siguientes direcciones:

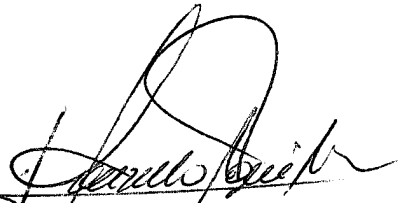
- Al Ing. Luis Alberto Merino González Alcalde del cantón Centinela del Cóndor en su oficina institucional ubicada en el edificio del GAD del Cantón Centinela del Cóndor lugar de público conocimiento.
- Al Dr. José Misael Granda Jimbo, Procurador Síndico del GAD cantonal de Centinela del Cóndor, o quien ocupe su cargo actualmente, en la misma dirección anterior.
- A los Concejales del cantón Centinela del Cóndor: Abg. Diego Fernando Juárez; Sr. Carlos Jiménez Jiménez; y, Lic. José Francisco Guamán Guamán, en la misma dirección anterior.
- Al Procurador General del Estado, en sus oficinas institucionales ubicadas en la calle Sevilla de Oro y Francisco de Orellana en la ciudad de Zamora, lugar de público conocimiento.

Las notificaciones que nos corresponden las recibiremos a través de los correos electrónicos institucionales: aaguilar@dpe.gob.ec - parmijos@dpe.gob.ec arivadeneira@dpe.gob.ec

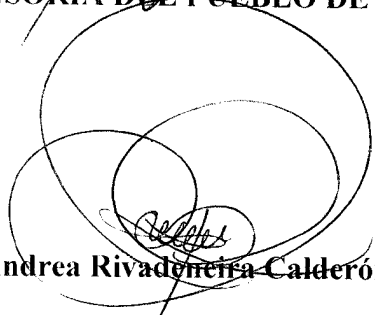
Autorizo a las abogadas Andrea Yalu Rivadeneira Calderón y Maricela Patricia Armijos Berrú, servidoras de esta Delegación, para que asuman el patrocinio de la presente acción, comparezcan a la respectiva audiencia y presenten en mi nombre cuanto escrito sea necesario en defensa de los derechos antes señalados.


Señor Juez, dígnese atenderme

Atentamente,


Antonio Gonzalo Aguilar Chamba

DELEGADO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ZAMORA CHINCHIPE


Ab. Andrea Rivadoneira Calderón
Mat. 19-2014-18


Ab. Maricela Armijos Berrú
Mat. 19-2011-28

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPE
TENTE CON SEDE EN EL CANTON
CENTINELA DEL CONDOR

RECIBIDO POR *Bety Tinchar*

FECHA *22-09-2016*

ANEXOS *10 folios*